

Medellín, cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Proceso	EJECUTIVO
Radicado	05001 31 03 005 2020 00062 01
Demandante	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Demandado	FERRETERÍA FERROVÁLVULAS SAS y ALBERTO HURTADO VILLEGAS
Juzgado Origen	QUINTO CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Procede el despacho a pronunciarse respecto de la solicitud de pruebas, formulada por el apoderado judicial de la parte demandada dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación, en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

Mediante auto del 18 de agosto de esta anualidad se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el juzgado de origen el 21 de julio de 2021 y, dentro del término de ejecutoria, el recurrente presentó petición de pruebas para que la demandante aporte copia de cada uno de los contratos que dieron lugar al diligenciamiento del título valor pagaré base de recaudo.

Argumenta que el fallo se profirió sin que el juez de primera instancia verificara el material documental probatorio que la parte demandante se comprometió a aportar al momento de rendir interrogatorio de parte, concerniente a enviar copia de cada uno de los contratos y/o negocios jurídicos que dieron lugar al diligenciamiento del valor por el cual se llenó el capital del pagaré base de recaudo, pues únicamente se le hizo allegar, un listado de las obligaciones en una hoja, y no los contratos que fue lo autorizado por el juez; refirió que esto es un atentado contra el artículo 29 de la Carta Política y que la falta documental no fue producto de negligencia o culpa suya, sino de la negativa posterior del juez.

CONSIDERACIONES

Nuestro ordenamiento jurídico procesal prevé como uno de los principios fundantes de las decisiones judiciales, la necesidad de la prueba, a fin de determinar los hechos alegados por las partes con lo probado en el proceso, para lo cual deben garantizarse los principios de igualdad, contradicción e imparcialidad.

Para que estas pruebas puedan incorporarse al trámite judicial, las partes cuentan con precisas oportunidades para aportarlas y solicitarlas (artículo 173 del CGP), momento en el que deben cumplir la carga

demostrativa que les compete, so pena de que sus pretensiones o medios exceptivos resulten imprósperos por carencia de respaldo (artículo 167 ibidem).

En la apelación de sentencias civiles existe la oportunidad para que las partes soliciten el decreto de pruebas pero, precisamente por tratarse de un estado avanzado del litigio, en el que en principio se supone agotada la instrucción, tal posibilidad es restringida a precisas hipótesis consagradas en el artículo 327 adjetivo, de entre las cuales, por las razones expuestas en la solicitud se debe destacar la del numeral 2, que prevé que al momento de la apelación de la sentencia las partes pueden pedir la práctica de pruebas cuando *"decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió"*.

En este caso, del análisis de las actuaciones surtidas en primera instancia se observa que el apoderado judicial de la parte pasiva, al contestar la demanda, no realizó ninguna solicitud probatoria relacionada con la documentación a que hace alusión en sede de segunda instancia¹, y en tal sentido, en el auto de decreto de pruebas, no se decretó prueba documental alguna tendiente a acreditar o aportar al plenario las obligaciones que dieron origen a las sumas de dinero consignadas en el título valor pagaré².

Ahora, el recurrente hace alusión al compromiso de aportación de tales documentos en la diligencia de interrogatorio de parte, sin embargo, al respecto se encontró que, en la audiencia llevada a cabo el día 21 de julio de 2021, el apoderado judicial de la parte demandada al realizar interrogatorio de parte al representante legal de la demandante, le indagó sobre la obligación o conjunto de obligaciones que comprenden la obligación pretendida³, frente a lo cual en un primero momento el representante legal manifestó que no fueron discriminadas en la demanda y que no tenía conocimiento del asunto, no obstante el director del despacho autorizó para que verificara dicha información y la respondiera más adelante⁴; fue así como posteriormente, el interrogado indicó uno a uno el número de las obligaciones, sin brindar más detalles, únicamente su número, frente a lo cual, el apoderado judicial de la parte demandada solicitó el envío de copia a su correo, a lo que el interrogado indagó *"¿de la relación de las obligaciones?"*, respondiendo el apoderado afirmativamente⁵.

¹ Ver documento "01.CuadernoPrimeraInstancia" luego "11.Contestación demanda"

² Ver archivo "01.CuadernoPrimeraInstancia" "16. AUTO FIJA AUDIENCIA"

³ Ver archivo "01.CuadernoPrimeraInstancia" y luego "22. AUDIENCIA 372 INTERROGATORIOS" Min. 6.29 seg.

⁴ Ver archivo "01.CuadernoPrimeraInstancia" y luego "22. AUDIENCIA 372 INTERROGATORIOS..." Min 8.

⁵ "01.CuadernoPrimeraInstancia" y luego "23. AUDIENCIA 372 INTERROGATORIOS SANAMIENTO LITIGIO PRUEBAS" Seg. 24 y min. 2:57 seg.

Así mismo, previo a manifestar sus alegatos el apoderado de la parte pasiva manifestó su inconformidad, pues el representante legal de Davivienda le había enviado un listado y lo que él necesitaba eran los contratos como tal, pues su poderdante le había hecho alusión a ciertos abonos ⁶, sin embargo el juez le indicó que esta etapa procesal era para manifestar los alegatos de conclusión y que posteriormente al momento de la liquidación podría hacer valer los abonos a que hace alusión.

Al respecto, se advierte que si bien el apoderado judicial hizo alusión a que los documentos no fueron allegados por negligencia o culpa suya, lo que nos ubicaría en el numeral 2° del artículo 327 del Código General del Proceso, basta revisar lo acontecido en el trámite de primera instancia para advertir que la prueba en ningún momento fue decretada por el A-quo e incluso ni siquiera fue solicitada por la parte activa en su oportunidad procesal; por lo tanto, sí se evidencia negligencia de la parte para procurar el recaudo de la prueba documental que reclama, pues el hecho de que haya solicitado un listado al cual accedió a suministrar la contraparte en el interrogatorio, no quiere decir de manera alguna que dichos documentos debían obrar en el expediente, pues no es el interrogatorio el momento procesal oportuno para solicitar pruebas, tal y como lo indica expresamente el artículo 203 del CGP, pues únicamente se permite aportar como parte integral del interrogatorio *"dibujos, graficas o representaciones"*.

Sobre el deber de las partes de procurar la obtención de las pruebas, los precedentes jurisprudenciales de la jurisdicción constitucional, al respecto han señalado:

"Con todo, las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes.

...

En conclusión la carga de la prueba impulsa la actividad de las partes para que aporten elementos de prueba al proceso, sin que una confíe la actividad a la otra o asuma como premio las dificultades que aquella tenga en el aporte y obtención de los medios de prueba. En el proceso dispositivo, las partes actúan con diligencia en el aporte de la prueba; en cumplir la carga de

⁶ "01.CuadernoPrimeraInstancia" y luego "24. AUDIENCIA 373 ALEGATOS" Min. 11.24

*demostrar lo que alegan porque tal actividad garantiza una decisión que resuelve el conflicto"*⁷.

En el mismo sentido:

*"Esta institución pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, "las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar.""*⁸

Por lo anterior, encuentra el despacho que, aunque la solicitud de prueba formulada en esta instancia es oportuna, lo cierto del caso es que para el despacho la parte demandante no demostró diligencia ni oportunidad al momento de procurar el decreto y practica de pruebas ante el juez de primera instancia, razón por la cual además de no configurarse la causal contemplada en el numeral 2 del artículo 327 del CGP, tampoco se configura ninguna otra de las causales consagradas en esta disposición normativa.

Finalmente, como quiera que la parte solicitante, ya sustentó su recurso y del mismo se corrió traslado a la contraparte haciendo uso del mismo, de conformidad con el inciso 3° del artículo 14° del Decreto 806 de 2020, ejecutoriado este auto deberá ingresar el expediente a despacho para proferir la respectiva sentencia.

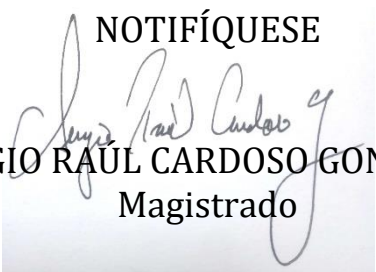
Por lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de prueba documental solicitada por la parte pasiva, por las razones expuestas.

SEGUNDO: En firme esta decisión, INGRESAR al despacho para decidir.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado

⁷ Sentencia T-733 de 2013, Corte Constitucional. M.P.: Luís Ernesto Varga Silva.

⁸ Sentencia C-086 de 2016, Corte Constitucional. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.